

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEMOCRACIA RADICAL. SOCIEDAD CIVIL, ESTADO Y MERCADO EN COLOMBIA Y PERÚ

Andrés Carrero Delgado*

Resumen

La transición política de finales de siglo XX en Perú y Colombia permitió la apertura a nuevos análisis sobre la relación entre sociedad civil, mercado y Estado. En términos generales, podría decirse que en ambos países se pretende, a través del neoliberalismo, solucionar las grandes brechas históricas que aquejan tanto lo económico como lo social y lo público-político; y es precisamente en este último aspecto que es necesario iniciar un debate sobre el sentido y practicidad de la sociedad civil.

Palabras clave: Sociedad Cvil; Democracia; Neoliberalismo; Perú y Colombia.

* Historiador egresado de la Universidad del Valle y Profesor Ocasional del programa de Historia de la Universidad del Cauca, profesor hora cátedra en la Universidad del Valle sede Zarzal en el programa de Trabajo Social y profesor hora cátedra en el programa de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas, sociales y Humanísticas de la Fundación Universidad del Área Andina, seccional Pereira.

TOWARDS UNA'S CONSTRUCTION RADICAL DEMOCRACY. CIVIL SOCIETY, CONDITION AND MARKET IN COLOMBIA AND PERU

Abstract

The political transition in the late twentieth century in Peru and Colombia allowed the opening of new analysis on the relationship between civil society, market and state. Overall, one could say that in both countries is intended, through neoliberalism, solving major historical gaps that plague both the economic and the social and public-political, and it's in this aspect that is necessary to initiate a debate about the meaning and practicality of civil society.

Keywords: Civil Society; Democracy; Neoliberalism; Perú and Colombia.

Fecha de recepción: 5 de sep. 2012

Fecha de aprobación: 21 de sep. 2012

El agotamiento de las estructuras gubernamentales impuestas en América Latina desde finales del siglo XIX, se hizo manifiesto en las transiciones políticas, económicas, sociales y culturales de los años ochenta del siglo XX. Fue principalmente durante esta década, que en todo el continente se impuso un nuevo discurso heredero de las distintas manifestaciones ideológicas que se consolidaron con anterioridad en los Estados Unidos y en Europa¹. La crítica al intervencionismo económico heredado de los principios *cepalinos* (Sunkel, 1995; Colin, 1995), así como también el agotamiento de los discursos oficiales y no oficiales (la izquierda por ejemplo (Moffe y Laclau, 2004)) contribuyeron igualmente a que en América Latina se hiciera una transición política que puso en práctica, diferentes experimentos de orden político-administrativo, para resolver el brumoso futuro.

En este contexto fueron diferentes aspectos que se lograron; en cuanto a la economía, el modelo neoliberal fue el de mayor aceptación en el continente, sin embargo es importante aclarar que dicho modelo se consolidó de una manera discontinua, acomodándose a las necesidades y preferencias de las elites gubernamentales de cada país (Portes, 2003); en cuanto a la política, el Estado en general redujo sus campos de intervencionismo y el mercado ocupó diversos lugares como el relacionado con la salud, el empleo y la seguridad social (Portes, 2003 y Garretón, 2004); igualmente la apertura neoliberal estuvo ligada a la globalización, la cual permitió el fortalecimiento de las comunicaciones mundiales, donde los diferentes grupos sociales que habían sido reprimidos por las dictaduras militares o elitistas (caso Pacto Punto Fijo en Venezuela o Frente

Nacional en Colombia (Murgueitio, 2005)) pudieron expresarse públicamente con un mayor lobby internacional, que permitió exponer las divergencias políticas, acumuladas durante años de persecución y violación de Derechos Humanos. Los resultados de este factor se pueden rastrear no solo en el triunfo de la democracia electoral, sino también en los cambios constitucionales que se sancionaron.

Dentro del aspecto político, podemos hacer referencia e hincapié en el fortalecimiento de la Sociedad Civil, entendida esta como la...

“esfera de la vida social organizada que es voluntaria, autogeneradora (ampliamente) autosostenida, autónoma del Estado y regida por un orden legal o conjunto de reglas compartidas [distinguiéndose de la sociedad] puesto que comprende a los ciudadanos que actúan colectivamente en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas, intercambiar información, alcanzar metas mutuas, hacer exigencias al Estado y demandar de los funcionales estatales el cumplimiento de sus responsabilidades” (Diamond, 1995: 5).

En cuanto a lo social, la aparición en la política pública de organizaciones de mujeres, trabajadores, estudiantes, religiosas, etc., logró calar en las curules del gobierno, así como también movilizarse hacia la ruptura del orden que se había caracterizado por ser machista, corporativista, represivos, entre otros; modificando de esta forma los distintos aspectos legales de la cultura política continental. Igualmente se consolidó un discurso étnico-cultural en las agendas

público-políticas; discurso que desplazó el viejo tema de las clases sociales, haciendo referencia a una historia compartida ajena a la visión de Estado-Nación de las élites dominantes, y que con sus peticiones no solo lograron reconocimientos de territorios², sino de autonomías e inclusión política, así como también regulación de algunos campos de la vida estatal, como puede verse en la presión ejercida por los grupos ambientalistas y sus resultados (Castillo, 2007).

Sin embargo, no se puede ser totalmente optimista ante este panorama, pues aunque sí hubo una transición del oxidado orden social a un nuevo orden, éste aún está en un proceso de maduración, y por lo tanto, no hay claridad de cómo se puede organizar el futuro continental.

A pocos años de haberse implementado el modelo neoliberal, se puede hacer una radiografía que refleja una situación crítica; en lo económico, el resultado de la apertura conllevó al incremento en los índices de desigualdad y pobreza³; en lo político, la democracia terminó siendo en el papel, pues internamente el orden se resquebraja frente a la emergencia de nuevos empresarios (Portes, 2003: 50) ilegales como los del narcotráfico en los países andinos, o las bandas organizadas de crimen, lavado de activos y desobediencia civil.

En cuanto a lo social, producto de la crisis económica y la ampliación de la pobreza, emerge en el continente una nueva clase que puede ser nominada como *proletariado informal*, el cual cada vez más se incrementa y por sus extensas jornadas laborales y bajos ingresos, no cuestionan de manera contundente, el sistema políticos o en su defecto, por su

afán de mejorar su condición de vida, terminan haciendo parte del crimen organizado y el narcotráfico.

En cuanto a lo cultural, allí sí se logró una mejoría dado el reconocimiento de las diferencias étnicas, así como también la ampliación de la ciudadanía; de todas formas, vale la pena pensar hasta dónde dicho reconocimiento contribuye a solucionar los problemas sociales que aqueja al continente, pues aunque hay una ampliación de la ciudadanía política a través del discurso étnico y cultural, las condiciones de clase muestran un panorama poco alentador, donde las clases dirigentes se enriquecen y las proletarias se pauperizan.

¿Hacia dónde marcha latinoamericana? Para Anibal Quijano (2004) el continente se enmarca en varios aspectos relevantes tales como 1) una continuada y creciente polarización social de la población producto del *ajuste estructural* que genera desempleo y a su vez pobreza al tiempo que enriquece a una minoría, 2) la privatización social del Estado, donde éste reduce cada vez más sus servicios públicos, 3) la recolonización del control de los recursos de producción y del capital en su conjunto, donde las transnacionales funcionan bajo la estrategia del enclave colonial, 4) la expansión de la resistencia popular y la deslegitimación del neoliberalismo, 5) la acentuación de la inestabilidad política, pero aún con el voto como mecanismo de alternancia del gobierno, 6) un proceso de nueva subjetivación social o constitución de nuevos sujetos sociales como el caso de los movimientos étnicos, 7) una creciente ocupación militar del territorio latinoamericano por las Fuerzas Armadas Norteamericanas y 8) un horizonte de conflictos de poder.

La constante es ver continuos debates y experimentos económicos como el socialismo científico, que comenzó a tener importancia en el Foro Social Mundial de Porto Alegre (2001), el capitalismo nacional (Venezuela, Brasil o Argentina) o el Neoliberalismo bajo algunas revisiones (Colombia o Perú) y la Tercera Vía (propuesta hecha en el nuevo gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y contemplada por Lagos y los expresidentes Lula de Brasil y N. Kirchner de Argentina, [seguido de la actual presidenta, C. Fernández de Kirchner]) (Quijano: 2004: 182); sin embargo aún no es claro cuál sería el nuevo orden social, es por tal motivo que pretendo ver cómo ha sido el proceso histórico de Colombia y Perú, relacionando Mercado, Estado y Sociedad, a la luz de estas condiciones expuestas y su relación con la Sociedad Civil, como garante de la consolidación de la democracia y del buen funcionamiento gubernamental.

Para tal fin se hará una exposición general de la situación en cada país, posteriormente se hará referencia a cómo la Sociedad Civil se ha consolidado en ambos países y la importancia para la construcción de nuevos órdenes, para finalmente plantear posibles futuros.

La apertura económica en Colombia y Perú. Nuevas estructuraciones entre sociedad y mercado.

Entre los 70 y los 90, la crisis del Estado Benefactor no solo erosionó la economía sino también la vigencia de los discursos hegemónicos en cada país latinoamericano; la búsqueda de un modelo de desarrollo así como también,

la apertura político-democrática, se puso en debate tanto en las agendas gubernamentales como también en la cotidianidad de la sociedad civil. Producto de esto fue la instauración de nuevas Constituciones y la implantación de sistemas de producción donde el Neoliberalismo fue el de mayor acogida.

Económicamente, antes de los 70 Brasil, México y Argentina aportaban al PIB latinoamericano el 77,9%, mientras Colombia, Perú, Chile y Venezuela aportaban juntos el 16%; sin embargo, la crisis económica y la implantación del modelo neoliberal conllevó a que se acelerara principalmente en los últimos la des-industrialización y se reforzara la primarización y terciarización de todos los países excepto Brasil. La importancia de los mercados internos fue desplazada por la búsqueda de satisfacer mercados externos y para tal fin, las medidas tomadas internamente conllevaron a una creciente tasa de desempleo, pauperización en las contrataciones, la fuga de mano de obra y posteriormente de cerebros hacia los Estados Unidos, España e Italia principalmente. Otro factor relevante es que las burguesías nacionales solo se pudieron mantener asociándose a la producción primaria para la exportación y la importación de mercaderías industriales, el capital financiero y los servicios.

Sin embargo, estos campos estaban controlados por las burguesías globales asociadas en transnacionales, lo que llevó a que las burguesías nacionales emergieran más subordinadas que antes y se tuviera que adecuar a las nuevas dinámicas de producción y explotación mundial, contrario a la tradicional relación trabajo-capital (Quijano, 2004: 184)

Esta organización del mercado latinoamericano contribuyó a una distribución de las clases sociales que no se había presentado anteriormente; ahora emergía un nuevo proletariado informal al tiempo que se presentaba una movilidad social descendente en aquellos individuos organizados en la clase media y las clases estamentales, mientras la pequeña burguesía que había aprovechado la transición para acomodarse al nuevo sistema productivo se reducía considerablemente. Estos factores llevaron a que la sociedad civil perdiera su capacidad de movilización pues como diría Quijano, “solo una minoría de trabajadores se agrupaba en diversas instituciones sociales de tipo gremial o político, a diferencia de tres o aún de dos décadas atrás” (Quijano, 2004: 186)

Pero ¿Qué otra opción que el Neoliberalismo? tanto en Perú como en Colombia, la incipiente industrialización y el crecimiento del PIB mostraban un panorama poco alentador si se quería pensar en un país con una capacidad de ingresar al nuevo sistema económico neoliberal. Este factor llevó a que las burguesías acogieran el neoliberalismo como un sistema económico capaz de sacar del atraso a sus países, al tiempo que les permitiera incrementar sus riquezas; hecho contrario al acaecido en el Brasil donde la burguesía nacional había logrado un amplio desarrollo de industria pesada. Sin embargo y como se ha planteado, la transición hacia el neoliberalismo contribuyó a que dicha pequeña burguesía nacional se viera desplazada por una burguesía global la cual consolidó su hegemonía, a través de la inversión en zonas francas, la coacción desde entidades como el FMI y la asesoría a los gobiernos para determinar

el grado de intervencionismo estatal en el mercado.

“Esto es, no solo como articulación política del dominio de una minoría sobre una mayoría, como en todas partes, sino como garante y administrador de la continuada y creciente exclusión social de la mayoría [...] ahora se trata del Estado de los capitalistas en contra de los trabajadores; y tales capitalistas son principalmente internacionales y controlan el capitalismo mundial y hoy en especial el capital financiero. Dicho de otro modo, hemos sido víctimas de un proceso de reprivatización del Estado” (Quijano: 2004: 192)

Para Quijano, la constante en América Latina es que “la creciente masa de desempleados, en especial de los sectores industriales, urbanos y modernizados de la región, han comenzado a orientarse más allá del reclamo de empleo, salario y servicios públicos, organizándose en redes de producción autogestionaria y de autogobierno de tipo comunal” (2004: 179) como ejemplo de este factor el autor expone el caso de los Piqueteros en la Argentina que se caracterizó por ser un movimiento de trabajadores, desempleados en especial urbanos que no solo protestaban por su situación de empleo y salarios sino que proponían igualmente la toma de tierras, de las fábricas abandonadas y la construcción organizada de núcleos productivos orientados por una reciprocidad. Para el caso peruano se resaltan las acciones colectivas que permitieron el bloqueo de remate de los servicios públicos de una ciudad y después el aumento de salarios del magisterio público, congelados por más de una década.

En el Perú, la relación entre el Estado y el mercado se ha caracterizado por una fuerte injerencia del autoritarismo y la represión a las expresiones democráticas de la sociedad civil. “A lo largo de 10 años, el fujimorismo logró de esa manera una drástica des-nacionalización y des-democratización del Estado y de la sociedad. En ese proceso se fue también desmantelando la estructura productiva y comercial inconveniente a los intereses del capital global, financiero en particular. Todo eso ha implicado la fragmentación, la dispersión o la desintegración de las relaciones sociales, de los agrupamientos sociales y de las identidades sociales y políticas asociadas a la previa situación” (Quijano, 2009, 48)

Aunque después de su destitución hubo una importante movilización popular que pareciera haber puesto de nuevo a la sociedad civil en la agenda pública, los efectos dejados por el gobierno de Fujimori terminaron poniendo a la sociedad civil frente a un mercado y unas organizaciones internacionales que estructuraron el país a su favor y a beneficio del capital global; “la OEA volvió a monitorear el proceso político peruano, con la previa concurrencia del Sub-Secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos y del Jefe del Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos, con sus respectivos asistentes. No es por eso una sorpresa que en el [siguiente] régimen formalmente presidido por Alejandro Toledo, la política económica fujimorista haya sido mantenida y profundizada, esto es empeorada en sus consecuencias sobre la mayoría de la población” (Quijano, 2009, 48).

En Colombia, diversas organizaciones sociales asumieron su papel de sociedad civil confrontando el capital privado, principalmente el relacionado con

inversiones en redes de infraestructura eléctrica, así como también el relacionado con las alzas a los combustibles. De todas maneras, la fortaleza de estos movimientos radica en dos aspectos: 1) una legalización y legitimación de las peticiones por parte del gobierno y 2) una unión de los grupos de la sociedad civil hacia el mismo aspecto; lastimosamente en pocas ocasiones los resultados se han logrado, como por ejemplo: el paro de camioneros llevado a cabo en el 2008.

Al respecto decía uno de los integrantes del paro que

“la protesta se justificaba porque los fletes no compensaban con lo que se estaba gastando en el viaje, pero al final, el paro terminó con el acuerdo del sindicato-gobierno y empresas, favoreciendo a los dueños de varios camiones y tractomulas, el pequeño propietario siguió igual, pues las empresas se inventaron diversas estrategias para seguir manteniendo el bajo costo; en esta vez empezaron a cobrar dizque un seguro que cuesta hasta más de \$100.000 por viaje y lo descuentan del flete”⁴ (Ent.1).

Al finalizar el paro, se pudo hacer un balance donde llamó la atención que ningún otro sindicato apoyó la protesta.

¿Cómo ver la acción de la sociedad civil? Principalmente las ONG y las organizaciones étnicas son las que han logrado mantener en pie la lucha popular, así como también, ganar espacios en la administración de los recursos y las políticas públicas, como por ejemplo, las autonomías territoriales obtenidas en la ley 70 que le permite tener territorios a las negritudes del Pacífico; igualmente, las manifestaciones sociales de gran

envergadura no son muy comunes, siendo necesario observar los casos regionales y locales.

En el estudio sobre acción colectiva y resistencia étnica realizado por Luís Carlos Castillo en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca (2010) se puede ver cómo dichas acciones colectivas se presentan principalmente contra las políticas públicas (50,1%), seguidas de las relacionadas con condiciones laborales (29,95); ahora bien, dependiendo la zona (población a estudiar) hay variaciones donde se muestra que comúnmente el referente antagónico es el Estado. En este sentido ¿cuál ha sido la importancia de dichas acciones colectivas? Llama la atención los repertorios de la protesta, donde el de mayor constancia es la movilización – plantón (26,1%) seguido del bloqueo de Carreteras (25,6%) con resultados en algunas ocasiones a favor de la población civil, pero en otras sin resultados positivos⁵. (Castillo, 2010: 151)

El duro camino hacia la Democracia. La sociedad civil en Colombia y Perú

Tanto en Colombia como en el Perú, el fortalecimiento de la sociedad civil ha sido una tarea ardua; exceptuando en los casos de las constituyentes (Perú 1993 y Colombia 1991), las organizaciones sociales se manifiestan independientemente, con poco o ningún impacto nacional y privilegiando los intereses personales de cada organización. Las diferentes luchas llevadas a cabo por dichos grupos comúnmente son contra el Estado, proyectos de ley o violencia armada, sin embargo estas acciones son de tipo regional o local y pocas veces se manifiestan como movilizaciones

nacionales; es quizá por ello que los resultados positivos y la fortaleza de dicha sociedad civil deba ser vista más desde las localidades que a nivel nacional.⁶ Otro factor relevante en la fortaleza de la sociedad civil radica en el apoyo que el Estado brinde a la misma legitimando su existencia y protegiendo a sus integrantes jurídicamente.

Sin embargo, categorías como “la diferencia”, “la etnicidad”, “la violencia”, “los Derechos Humanos” y “Género” son de mucha importancia para analizar las motivaciones que movilizan grupos de la sociedad civil y hasta en algunos casos, que les ha permitido actuar conjuntamente haciendo reclamaciones al Estado, así como también un lobby internacional. De todas maneras, es importante recordar que es sólo si el Estado garantiza la seguridad y la legitimidad de dichas organizaciones y sus acciones que éstas a su vez existen, reclaman y logran sus objetivos.

En Perú, con todas las críticas que se puedan hacer sobre el centralismo y el poder de las organizaciones de Derechos Humanos asentadas en Lima, así como también la cooptación de estas organizaciones frente a las demás de la periferia, ha sido solo a través del poder económico y político de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) que muchas reclamaciones de tipo global (Equidad de género, diferencia étnica, Violencia) han logrado efectividad y la apertura dentro del Estado a dichas reclamaciones. Igualmente, la organización de la Asociación de Mujeres es otra de las agrupaciones que más han logrado cooptar pequeños grupos sociales y sus peticiones, con resultados altamente positivos como por ejemplo, la fundación del Ministerio de la Mujer.

Ya desde 1985, la CNDDHH venía en un ejercicio representativo de las demás organizaciones sociales que conforman la sociedad civil peruana. En dicha organización cabía una amplia variedad de ONG de Derechos Humanos, las Codeh, representantes de grupos familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y de Sendero Luminoso, organizaciones de mujeres, organizaciones en representación de ciudadanos urbanos y rurales, etc., quienes se organizaron principalmente para cuestionar el grado de violencia que azotaba al país. Como postulado principal resonaba el decir que se pronunciaban *“clara y rotundamente por la vida y la paz con justicia social. Consideramos que no existe razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma”* (Drzewieniecki, 2002: 524)

Durante el gobierno de Fujimori, la constante violación a los Derechos Humanos permitió el fortalecimiento de esta organización, posteriormente, con la disminución de la violencia del Estado hacia las organizaciones sociales producto de la presión internacional, así como también después de la captura de Abimael Guzmán (máximo comandante de Sendero Luminoso), la CNDDHH se convirtió en la principal organización de la sociedad civil peruana. En el caso de las organizaciones de mujeres, encontraron formas de cooperación conjunta además de la alianza con el Colegio de Abogados de Lima⁷. Ahora bien, sobre la relación de esta organización con el Estado, llama la atención que se ha fortalecido más en las zonas provinciales que a nivel nacional, pues aunque desde el gobierno de Alan García (1985-1990) se pretendió mantener un diálogo constante, la CNDDHH declaraba que el gobierno no tenía compromiso; durante el gobierno de Fujimori la posición de los Ministerios

fue de ocultar las constantes violaciones a los Derechos Humanos (Drzewieniecki, 2004: 538).

Este mismo problema manifiesto en la relación Estado-CNDDHH como una representante de la sociedad civil se manifestó con el segundo grupo social más fuerte del Perú; el de las mujeres. Si bien es cierto, al comienzo se presentó un coqueteo entre el Estado y dicho movimiento de mujeres, este aspecto no logró mantenerse por mucho tiempo pues siempre el gobierno ocultó las violaciones a los DD.HH., en mujeres que asistían a espacios institucionales de salud para que les hicieran la ligadura de trompas, o en la persecución durante marchas, etc., (Barring, 2002).

El momento de mejores resultados se presentó cuando, paradójicamente durante el gobierno de Fujimori, éste se manifestara como un defensor y promotor de los derechos de la mujer al tiempo que se presentaba como un opositor a la Iglesia y su discurso conservador⁸. Sin embargo, no importando el compromiso entre el gobierno y esta organización, no importando los acuerdos logrados en las Mesas de Trabajo, donde se aceptaba la instauración de espacios clínicos para operaciones de control natal (la ligadura de trompas y las vasectomías), dichas instituciones clínicas, en repetidas ocasiones actuaron contra las personas que se practicaban las operaciones. La ruptura con el gobierno se presentó cuando el Minsalud no respondió y las instituciones obligadas a hacerlo ocultaron las violaciones a los DDHH.

En Colombia, las movilizaciones sociales inicialmente se caracterizaron por estar representadas en el movimiento obrero y estudiantil, sin embargo factores como

la precarización laboral, la apertura económica, el conflicto armado, entre otros, han contribuido a la crisis de éstos, al tiempo que emergen nuevas reclamaciones de organizaciones sociales como las de LGBT, las organizaciones de mujeres, los ambientalistas y de dignidad animal, los grupos étnicos, etc., lo que ha generado que las peticiones tradicionales de la sociedad civil de finales de los setenta, se muevan hoy hacia temáticas globales y su injerencia en las decisiones de los gobiernos sean fuertes en vista de la presión internacional orientada hacia los mismos temas. Sin embargo, y al igual que en el caso del Perú, la sociedad civil pareciera débil pero dicha debilidad vista a nivel nacional, muestra que en lo local y regional se presentan otras situaciones, donde la pugna por las reformas privatizadoras de las empresas públicas, el reclamo a territorios autónomos (Oslender, 2004) frente a la injerencia de actores armados legales e ilegales, así como también la lucha contra empresas privadas prestadoras de servicios públicos, sea fuerte y constante (Castillo, Luis, 2010; Guzmán, Álvaro, 2010).

La apertura democrática que ha obligado la modificación de parágrafos constitucionales como la aceptación del aborto bajo tres condiciones: Violación, malformación del feto y riesgo de muerte en la madre, es un ejemplo de la fortaleza de algunas organizaciones de la sociedad civil; de la misma manera, la protesta contra los actores armados en lo local, como también en lo nacional muestra que las organizaciones sociales han dado paso a nuevas peticiones que se posicionan sobre las tradicionales relacionadas con salarios y distribución; sin embargo es importante recordar que durante los últimos 8 años del

gobierno de Álvaro Uribe, la reducción de la protesta social estuvo determinada por el discurso hegemónico uribista que implantó la ecuación *protesta y oposición=terrorismo* (Atehortua, Adolfo y otros, 2009).

A diferencia del Perú, en Colombia el fragmento de la sociedad civil que más importancia ha tenido es el que engloba los grupos étnicos que propugnan por un país de la diferencia; este aspecto ha logrado la conversión de sus asociaciones en movimientos sociales como el caso de los indígenas y negritudes; la fortaleza del movimiento radica principalmente en la capacidad para resignificar los territorios, la historia y a su vez reclamar una participación democrática y abierta dentro de las esferas estatales a manera de minoría étnica (Catherine Walsh y otros, 2005).

El mejor resultado de dichas peticiones es haber logrado durante los debates de la constituyente (1991) un reconocimiento de territorios autónomos, junto con el respeto a la lengua (indígenas), la posibilidad de educación étnica en sus propias lenguas y tradiciones, así como también un espacio en la proyección de actividades económicas que vinculan sus territorios. De todas maneras queda la inquietud sobre si el país en realidad ha asumido en general el ser pluriétnico pues las relaciones capital-Estado, pocas veces ha tenido presente la importancia de la diversidad de pensamiento como un elemento central del debate para los megaproyectos.

El logro más relevante de estas organizaciones sociales radica principalmente en la resignificación del concepto nación, oponiéndose frontalmente al principio de nación

mestiza y reinventando la historia nacional donde lo variopinto es la característica principal. Un ejemplo palpable de ello es la celebración de "las independencias" y no la tradicional Independencia mestiza en el 2010. En cuanto a la participación de otras organizaciones como las de Derechos Humanos, en el caso colombiano los principales enemigos han radicado en las guerrillas, algunas veces el Estado y los grupos paramilitares, para quienes los defensores de DD.HH., ONG y activistas políticos era catalogados como aliados de la guerrilla (Romero, 2003)

Ahora bien, si se quiere hacer un seguimiento a la sociedad civil, hay que reducir la escala de análisis y ver el comportamiento de las organizaciones sociales de tipo popular como las manifestaciones contra el mercado, los actores armados, etc., pues los momentos de mayor auge se presentaron durante la transición hacia la constitución del 91 (Hernández, Nohema. 2007), pareciendo desde entonces que el poder de la sociedad civil se hubiera opacado. Valdría la pena pensar que se ha fortalecido a nivel local y regional.

¿Una democracia radical?

La emergencia de la sociedad civil estuvo determinada por la presión de los discursos totalitaristas que a nombre del Estado (dictaduras y modelos de desarrollo hacia adentro) y del partido (discurso leninista) pretendieron dar respuesta por la diversidad que emergió en el siglo XX. Por su misma naturaleza, la sociedad civil está constituida como sistema de necesidades particulares y tiene que estar referenciada al Estado como encarnación ética de la totalidad social; la existencia de la misma y su fortaleza dependen directamente de

la legalidad que el Estado le dé y la capacidad que tengan los individuos que conforman la sociedad, de organizarse y posicionarse como antagonistas del mercado y la política hegemónica del discurso estatal.

Esta condición nos lleva a pensarnos algunos puntos de los cuales se pueden resaltar los siguientes:

1) Repensemos la concepción de Estado: si aceptamos la idea de que el Estado es un actor independiente con capacidad de organización y total autonomía hacia la población, entonces estaríamos negando la posibilidad de existencia de la sociedad civil, quien a manera de instrumento de orquesta actúa, ensaya y se prepara independientemente para posteriormente unirse con otros instrumentos (organizaciones sociales) y ejercer un sonido (presión) que constituye posteriormente una sonata (leyes, constituciones, Estado). Solo cuando el discurso hegemónico sea el de una democracia radical (C.Moffe y E. Laclau, 2004; C. Moffe, 1995) que pueda emerger sustentada en la diferencia y legitimando la antagonismo como un determinante en la construcción de la sociedad, es que la sociedad civil podrá consolidar su poder, al tiempo que el Estado se mantendrá como un garante del orden social y el mantenimiento del discurso hegemónico democrático.

2) Diferencias entre manifestación y acción: La particularidad de la sociedad civil es que ésta no sea una sociedad de mercado, sino más bien, producto del desarrollo de redes de solidaridad que contrarrestan las fuerzas del mercado (Lechner, 1995: 25), por tal motivo es necesario resaltar que la sociedad civil se manifiesta como antagónica. La

comprensión y legitimación de dicha condición es la garante del mantenimiento del orden social; ahora bien, por su condición crítica al Estado y autocrítica a las mismas organizaciones que le conforman, la sociedad civil se caracteriza por su constante manifestación pero esto no necesariamente determina que las peticiones, reclamaciones, propuestas, etc., terminen convertidas en resultados positivos.

Si se logra mantener una mirada amplia sobre las acciones colectivas al tiempo que se conserva la mirada sobre los movimientos sociales, será más fácil entonces hacerle un seguimiento a la sociedad civil. Solo si se mantiene la premisa de que la sociedad civil emerge como antagónica al mercado y al Estado y que así como puede manifestarse a nivel nacional se puede manifestar a nivel local o regional (principalmente), es que se logrará una medición de la efectividad de la misma.

3) Colonialidad del poder: la reestructuración capitalista del mundo ha permitido no solo la escritura de una historia global, sino también el grado de inserción y participación democrática de las riquezas del mundo. La estructuración centro-periferia, permite una determinación de la relación mercado-

Estado-sociedad; sin embargo, después de la primera década del siglo XXI se puede ver cómo emergen nuevos grupos de jóvenes y una diversidad de ONG que propugnan por una reevaluación de las tesis sobre el orden mundial.

Al tiempo que se consolida y gana diariamente adeptos la oposición al imperialismo capitalista, la estructuración del mercado y la manera como las riquezas se distribuyen, también en las regiones y localidades emergen nuevos discursos que antagonizan con el hegemónico blanco-mestizo que ha gobernado desde 1789. Por hoy se discute sobre la idea jacobina de igualdad y se consolida la diferencia como un elemento central en el nuevo pensamiento mundo. ¿Será que ahora sí se podrá pensar en que la sociedad civil emergerá como la garante del control político del Estado y del mercado? Quedan como retos sociales de dicha sociedad civil la lucha no solo por un mundo más equitativo, sino también por la protección ambiental, la disminución de la violencia racial, de género, pero también la cooptación de jóvenes y jovencitas que diariamente encuentran en la delincuencia y la venta de drogas, una salida a sus problemas económicos. ¿Será capaz la sociedad civil de garantizar la protección de un mundo futuro? .

BIBLIOGRAFÍA

1. Archila, M. Los movimientos sociales en la encrucijada de comienzos del siglo XXI, Francisco Leal Buitrago (Editor), en *la encrucijada: Colombia en el siglo XXI*, Bogotá, ed. Norma, 2006, pp. 261-289.
2. Atehortua A.; Rojas, DM. y Guillou, R. Reflexión para la planeación, Seguridad Democrática y Política Antidrogas, Gobernación de Norte de Santander y Consejo Nacional de Planeación, Colombia, 2009.
3. Barring, M. La persistencia de la memoria: Feminismo y Estado en el Perú de la década de 1990, en: *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono sur*, Adolfo Panfichi (coordinador), México, Editorial FCE, 2002.
4. Betancourt, A. Historia y nación, La Carreta Editores, Bogotá, 2007.
5. Carrera Damas, G. "introducción: sobre la historiografía venezolana" en: *Historia de la Historiografía Venezolana, textos para su estudio*, sel., introd., e índices Germán Carrera, vol. 1, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1961, pp. XXII - LV (Ciencias Sociales, IV)
6. Castillo, LC., Acción colectiva y resistencia negra en el norte del Cauca y sur del Valle, en: Luis Castillo, Álvaro Guzmán, Jorge Hernández, Mario Luna y Fernando Urrea (Auts.), *Etnicidad, acción colectiva y resistencia. El norte del Cauca y sur del Valle a comienzos del siglo XXI*, Cali, Programa editorial de la Universidad del Valle, 2010, pp. 125-191.
7. Castillo, LC. Etnicidad y nación. El desafío de la diversidad en Colombia, Cali, Programa editorial de la Universidad del Valle, 2007.
8. Colín M. L. "Latin American Business History, c. 1870-1930: recent trends in the argentinian and brazilian literatura", in: *Revista ALHE*, Vol 2, Núm. 04, 1995.: julio - diciembre.
9. Diamond, L. *Reflexión sobre la sociedad civil. Hacia la consolidación democrática*, en: Las incertidumbres de la Democracia, Pedro Santana Rodríguez (compilador), Bogotá, Ediciones Foro Nacional por Colombia, 1995.
10. Drzewieniecki, J. *La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú: un estudio de caso*, en: *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono sur*, Adolfo Panfichi (coordinador), México, Editorial FCE, 2002.
11. Garretón, MA.; Cavarozzi, M.; Cleaves, M.; Gereffi, G. y Hartlyn, J. [2003]. *El nuevo contexto mundial*, en: América Latina en el siglo XXI, Santiago de Chile, Editorial LOM, 2004.
12. Guzmán, Á. Acción colectiva y región: el norte del Cauca y el sur del Valle (2006-2007), en: Castillo L., Guzmán A., Hernández J, Luna M. y Urrea F. (Auts.), *Etnicidad, acción colectiva y resistencia. El norte del Cauca y sur del Valle a comienzos del siglo XXI*, Cali, Programa editorial de la Universidad del Valle, 2010, pp.193-301
13. Hernández Guevara, N. Participación e incidencia de la sociedad civil en políticas públicas educativas: el caso colombiano, 1ra edición, Buenos Aires, Colección de libros FLAPE, 2007.
14. Hernández, J. Trabajo, paz, *calidad de vida y otras reivindicaciones: Acciones de protesta en el Valle del Cauca*, 2010. El observador regional, CIDSE, Cali, marzo de 2011, N° 17, en: <http://elobservador.univalle.edu.co/>
15. Kahatt, F. Sociedad civil y gobernabilidad democrática en Perú, en: *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono sur*, Adolfo Panfichi (coordinador), México, Editorial FCE, 2002, pp. 449-483.
16. Laclau, E, Mouffe, Chantal. Hegemonía y estrategia socialista: hacia una

- radicalización de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica, II reimpresión, 2004.
17. Lechner, N. La (problemática) invocación de la sociedad civil, en: Las incertidumbres de la Democracia, Pedro Santana Rodríguez (compilador), Bogotá, Ediciones Foro Nacional por Colombia, 1995.
 18. Mofe, Ch. La Democracia radical, ¿moderna o posmoderna?, en: Las incertidumbres de la Democracia, Pedro Santana Rodríguez (compilador), Bogotá, Ediciones Foro Nacional por Colombia, 1995.
 19. Murgueitio, C. "Los gobiernos militares de Marco Pérez Jiménez y Gustavo Rojas Pinilla: nacionalismo, anticomunismo y sus relaciones con los Estados Unidos (1953-1957)", en: Historia y espacio, revista del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, # 23, Cali, Universidad del Valle, Agosto-Diciembre de 2005, pp. 39-96.
 20. Oslender, U. "Construyendo contrapoderes a las nuevas guerras geo-económicas: camino hacia una globalización de la resistencia", Revista de Humanidades Tabula Rasa N° 2, pp. 59-78.
 21. Portes, A. Las estructuras de clases sociales en América Latina: su composición y cambio durante la era neoliberal; en: El desarrollo futuro de América Latina, Editorial Ilsa, Bogotá, 2004.
 22. Pobreza y desigualdad: la perspectiva de América Latina y el Caribe y propuestas en ámbitos de protección social y educación, (preparado por la Comisión Económica para América Latina CEPAL), OEA; VI Cumbre de las Américas, Cartagena 2012; 02 de noviembre de 2012. En: http://www.summit-americas.org/SIRG/2011/110711/cepal_es.pdf
 23. Quijano, A. "El laberinto de América Latina ¿hay otras salidas?" En: Journal of Iberian and Latin American Studies, 10:2, December 2004.
 24. Romero, M. Paramilitares y Autodefensas, 1982-2003. Editorial Planeta, Bogotá, 2003.
 25. Sunkel, O. Del desarrollo hacia adentro al desarrollo desde dentro, en: José Luis Reyna (compilador), *América Latina a finales de siglo*, F.C.E, México, 1995, pp. 15-60.
 26. Walsh, C.; León, Edizon y Restrepo, Eduardo. Movimientos sociales afro y políticas de identidad en Colombia y Ecuador, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2005.

REFERENCIAS

- 1 En lo que tiene que ver con la Historiografía, entendida esta como la producción de textos de Historia que implica tendencia analítica, teorías, modelos de análisis, etc., llama la atención que fuese igualmente durante estos años, donde se criticó con mayor ahínco la historiografía tradicional y se propuso una nueva Historia, que incluía nuevos actores en la construcción de la idea de nación. (Betancourt, 2007). Para el caso de Venezuela (Carrera, 1961)
- 2 En el caso étnico, en Colombia se lograron grandes avances entregando resguardos a comunidades indígenas, así como también a comunidades negras. De todas formas queda una deuda con los grupos de campesinos en Colombia y el Perú, quienes no han obtenido el respaldo del Estado que asegure un respeto por la propiedad territorial. Recuérdese entonces que en países como Colombia, la existencia del conflicto armado y la emergencia de grupos ilegales que controlan la fabricación y tráfico de drogas, ha generado un detrimento en los avances políticos frente a la propiedad de la tierra.
- 3 Actualmente los logros en la reducción de la desigualdad y la pobreza permiten hacerse una idea básica de cuán difícil ha sido para los gobiernos, solucionar este efecto colateral del Neoliberalismo. Aunque las cifras se han reducido, aún queda mucho por trabajar y especialmente en el campo de la generación de empleo, la mejora en la calidad de vida (ICV-NBI) y el fortalecimiento institucional del Estado que garantice la seguridad social; (CEPAL, 2011)
- 4 Este comentario es parte de una charla que tuve con José Carrero López, conductor de camión y pequeño propietario quien estuvo en el paro.
- 5 Sobre las acciones colectivas, en el año 2010, de acuerdo con el CIDSE las acciones de protesta en Colombia, en el caso del Valle del Cauca, resaltan las relacionadas con trabajo, y las condiciones básicas de vivienda, siendo Diciembre el mes de mayor número de acciones, seguido de agosto y abril respectivamente (Hernández, 2011)
- 6 Para Kahatt, es fácil encontrar movilizaciones donde la sociedad civil ejerce su función, pero dichas movilizaciones son de tipo local o regional, manifestando una fragmentación de la misma cuando se quiere analizar su fuerza de tipo nacional; para el caso Colombiano pareciera ser la misma situación. Si se pretende analizar las movilizaciones sociales de tipo nacional, éstas han sido pocas comparadas con las de tipo local o regional, aunque claro está, recuérdese la importancia de la legitimación que da el Estado a dicha sociedad civil; en este sentido, si se tiene presente la hipótesis de Archila, quien plantea que mientras más autoritarios sean los gobiernos, menos posibilidades de expresión popular hay, es entendible por qué durante los gobiernos de Fujimori en Perú y Uribe en Colombia, dichas manifestaciones de tipo nacional se reducen considerablemente. Ver: Kahatt, Farid (2002) y Archila, Mauricio (2006).
- 7 Es importante resaltar que dicho trabajo conjunto se ha logrado a través de la instauración de mesas de trabajo abarcando hoy organizaciones que abarcan diversidad de temas como discapacidad física, género, preferencia sexual, VIH/Sida, asuntos afroperuanos, entre otros; al respecto ver: Drzewieniecki, Johana. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (2002: 534)
- 8 En las páginas 585-86, Barring (2002) toma parte de la intervención presidencial en la cuarta conferencia internacional de la mujer (Pekín, 1995) donde es Fujimori quien se presenta como un promotor de los derechos de la mujer.